



FLASHES A.S.E.P.

MAYO- 2006

FICHA TECNICA

Diseño y Realización: De la investigación, del cuestionario y de la muestra:
A.S.E.P.

Diseño Muestral: 1.201 personas de uno y otro sexo, de 18 y más años, residentes en España. Muestra aleatoria estratificada por Comunidades Autónomas y estratos de municipios según su número de habitantes. Selección aleatoria de municipios y secciones censales dentro de cada estrato y de cada Comunidad Autónoma. Selección de hogares mediante sistema de rutas aleatorias dentro de cada sección censal. Selección final del entrevistado en cada hogar mediante cuotas de sexo y edad.

Trabajo de Campo: Realizado durante los días 8 al 14 de mayo de 2.006, mediante encuesta personal en el hogar de cada entrevistado, por la Red de Intercampo, S.A. Supervisión del trabajo de Campo realizado por A.S.E.P.

Proceso de Datos: Diseñado y realizado por A.S.E.P. con "software" propio, elaborado por J.D. Systems.

Análisis e Informe: Diseñado y realizado por A.S.E.P., y terminado el 30 de mayo de 2.006.

Banco de Datos ASEP/JDS: www.jdsurvey.net

**DIRECCION:
JUAN DIEZ NICOLAS**

"FLASHES"

(Mayo 2006)

EL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO

Lamentablemente este comentario tiene que centrarse una vez más en los mismos temas que estos últimos meses, que parecen ser los únicos importantes para España, si bien lo cierto es que son importantes solo para los políticos, pero no para el pueblo español. En efecto, los datos de esta investigación de mayo ponen de manifiesto que los problemas que preocupan a los españoles son el desempleo, la vivienda, la inmigración y las pensiones, e incluso, en quinto lugar, el terrorismo (que ha bajado a esa posición debido al anuncio de alto el fuego por parte de la banda terrorista ETA). Los entrevistados podían mencionar hasta tres problemas, de manera que sumando las proporciones de los que mencionan las “autonomías, organización territorial, nacionalismos, plan Ibarretxe, etc.” en cada una de ellas, solo alcanzan al 4%, es decir, diez veces menos menciones que el desempleo y cinco veces menos que el terrorismo. Sin embargo, el Gobierno lleva dos años dedicado a convencernos de que los ciudadanos quieren que sus Comunidades Autónomas se denominen “naciones”. Pues bien, los datos de esta investigación demuestran que un 72% de los españoles quieren que su Comunidad se denomine así, Comunidad Autónoma (opinión que mantienen el 76% de los gallegos, el 72% de los andaluces, el 61% de los vascos y el 51% de los catalanes). Además, el 64% de los votantes del PSOE y el 47% de los residentes en Cataluña opinan que “solo España es una nación”. Pero es evidente que ni los políticos catalanes ni los dirigentes del PSOE comparten la opinión de sus electores.

Las paradojas de esta investigación no acaban aquí, sin embargo, puesto que en lo que respecta al estatuto catalán, aprobado en el Senado gracias a que los senadores de ERC se abstuvieron en lugar de votar en contra, como les pedían sus bases, los datos sugieren que solo un 51% de los ciudadanos de Cataluña votarán “sí” en el referéndum (según los datos del mes pasado la proporción era del 58%), frente a un 15% que votarán en contra y un 35% que todavía no saben lo que harán. Debe especificarse, además, que entre los votantes del PSOE, un 34% respaldan el nuevo estatuto, incluyendo un 9% que afirman que lo apoyarían con toda seguridad (un 13% en el sondeo de abril). Parece concluirse, por tanto, que el apoyo al estatuto de Cataluña ha disminuido entre abril y mayo, tanto entre los votantes del PSOE como en Cataluña.

En realidad, lo sucedido alrededor del nuevo estatuto para Cataluña es bastante sorprendente. Todo arranca cuando, después de las elecciones autonómicas de 2003 en Cataluña el PSC decide formar gobierno con el apoyo de ERC y de IC-LV, desalojando con esa decisión a CiU del poder, que lo había ocupado durante dos décadas. El tripartito así formado cumplía dos funciones importantes para el PSOE. Por un lado desbancaba a CiU del gobierno de Cataluña a pesar de haber sido el partido más votado. Por otra, al asociarse con ERC conformaba un gobierno que tenía como misión crearle problemas al Gobierno Nacional del PP, puesto que en los cálculos de aquellas fechas nadie pensaba, ni siquiera los dirigentes del PSOE, que el PSOE pudiera ganar las elecciones y, por tanto, el Gobierno de España. El tripartito catalán así formado garantizaba una mayoría parlamentaria al PSC en Cataluña, y una mayoría parlamentaria al PSOE en el Congreso de los Diputados (después de las elecciones del 2004).

Apoyándose en el tripartito, el Gobierno del PSOE ha escenificado durante los dos últimos años la frase “todos los partidos están de acuerdo menos el PP”, obviando sin embargo que el PP sumó 9.763.144 votos en las elecciones del 2004 (y 148 escaños), frente a los 11.026.163 votos del PSOE (164 escaños), y que todos los demás partidos con representación parlamentaria (16 en total) suman 3.872.839 votos y 38 escaños parlamentarios. Por supuesto la mayoría parlamentaria es indiscutible, tanto en respaldo electoral como en escaños (aunque para ciertas cuestiones el PSOE no cuenta con todos, como es lógico). El PSOE tiene que aceptar que resulta difícil desconocer permanentemente a un partido con esa representación parlamentaria, y el PP tiene que aceptar que su política de “hacer amigos” es manifiestamente mejorable. Por otra parte, la discusión del proyecto de estatuto tanto en el parlamento catalán como en el Congreso de los Diputados, ha llevado finalmente a una situación algo esquizofrénica según la cual el PSOE y el Gobierno pactan con CiU, mientras que el PSC pacta con ERC. Si esto fuese una estrategia perfectamente diseñada por Zapatero para confundir y enfrentar a los nacionalistas catalanes entre sí posiblemente merecería un aplauso y reconocimiento. Pero no parece que eso sea así, de manera que lo que sí se percibe es confusión en el electorado catalán, críticas a su gobierno, que empeñado en esas cuestiones está desatendiendo las políticas sociales y económicas concretas que Cataluña necesita.

Por ello, la situación a solo unas pocas semanas del referéndum, que se celebrará el 18 de junio, puede cuando menos ser calificada de enrevesada y confusa (con un Maragall enfadado con la ejecutiva de su partido, que a su vez parece estar apoyando su sustitución por Montilla). Los datos de esta investigación parecen sugerir que la participación electoral será baja, puede

que no supere el 60%, aunque el voto afirmativo será mayoritario, pero con un fuerte rechazo también debido a que dos partidos están pidiendo el “no”, el PP y ERC. En conclusión, aunque el referéndum sea favorable al nuevo estatuto catalán, no parece que pueda alcanzar un respaldo mayoritario de ese electorado, y además habrá creado un ambiente de desconfianza entre las poblaciones de diferentes lugares de España. Los catalanes, junto con los vascos, son los peor valorados por los habitantes de cualquier otra Comunidad, como se ha podido comprobar en esta investigación, según los datos que se comentan en La Actualidad. Así pues, ERC está molesta con el Gobierno del PSOE a causa del pacto de éste con CiU, pero mantiene aparentemente su apoyo a Maragall; CiU comienza a estar molesta con el PSOE y con el PSC porque no ve cumplido su propósito de entrar nuevamente en el gobierno de Cataluña; Maragall está molesto con la ejecutiva de su partido porque le están moviendo la silla para ofrecérsela a Montilla; y el Gobierno de Zapatero está molesto con Maragall por haberle colocado en una difícil situación al no haber controlado adecuadamente el proceso de elaboración del estatuto. Así las cosas, si el referéndum fuese un fracaso, los costes los pagarían tanto Maragall como Zapatero, pero si es solo un medio fracaso (es decir, si gana el sí pero con baja participación y por poca diferencia) la factura la pagará solo Maragall, mientras que si el sí ganase de forma arrolladora posiblemente sería Zapatero, y no Maragall, quién rentabilizaría el resultado. En cualquier caso, después del referéndum tendrá que hablar el Tribunal Constitucional, y en el otoño habrá nuevas elecciones autonómicas en Cataluña, que reflejarán con toda seguridad la reacción del electorado de esa Comunidad ante todo lo sucedido.

Pero si el debate sobre el referéndum ha costado controversias dentro del PSOE y enfrentamientos con el PP y con gran parte del electorado español, la decisión del Gobierno del PSOE de negociar con ETA está provocando mayores controversias aún.

En efecto, solo un tercio de los españoles creen que el alto el fuego de ETA será definitivo, mientras que casi la mitad expresan claramente sus dudas por unas u otras razones. Y no les falta razón a estos últimos, ya que las declaraciones de ETA y de Batasuna son meridianamente claras respecto a sus condiciones para mantener esta “medio-tregua” (pues resulta cada vez más evidente que la tregua no es ni mucho menos completa, y que se está lejos de una entrega de las armas por parte de la banda terrorista). Fuentes no desautorizadas han afirmado que el PSOE inició sus conversaciones con la banda terrorista ETA hace cuatro años, es decir, dos años antes de las últimas elecciones y de que el PSOE accediese al poder. No es extraño, si esto no es desmentido, que algunos se pregunten por las consecuencias de ese inicio de conversaciones durante los dos últimos años de gobierno

popular. De cualquier manera, parecen cuando menos exageradas las actitudes, y sobre todo los comportamientos, del Gobierno de España, en este proceso de diálogo. No es preciso realizar ninguna investigación para saber que la práctica totalidad de los españoles desea y espera que desaparezca la amenaza terrorista de ETA. Pero la evidencia que emana de muchas investigaciones demuestra de manera inequívoca que los españoles no quieren un armisticio con ETA, sino su rendición incondicional, su abandono de la violencia y su desarticulación. Los datos del sondeo mensual de ASEP en abril demostraron que había un rechazo muy amplio a cualquier tipo de contrapartida para que ETA depusiera sus armas, pero los datos de esta investigación de mayo muestran un rechazo incluso más firme. ¿Cómo piensa compaginar Zapatero las continuas declaraciones de ETA y Batasuna respecto a la autodeterminación del País Vasco, la anexión de Navarra y la puesta en libertad de todos sus presos (condiciones que la banda ha considerado reiteradamente como irrenunciables) con la también continua declaración gubernamental de que no se pagará ningún precio político por la desarticulación de la banda? Las declaraciones de Otegi, sus amenazas, sus exigencias, sus “chulerías”, provocan simultáneamente un creciente rechazo por parte de la opinión pública, al mismo tiempo que un silencio “atronador” por parte del Gobierno de Zapatero, que sigue disculpando esas declaraciones y “mirando para otro lado”. La situación se parece a la de aquel individuo que había caído a un pozo del que era imposible salir por sí mismo, y al oír acercarse a alguien le gritaba con fuerza: “¡escucha, si me sacas de aquí te perdono la vida!” La violencia callejera ha vuelto, las extorsiones a empresarios han vuelto, aunque el Gobierno de Zapatero haga como si no se enterase de nada.

Sin embargo, y contrariamente al criterio del Fiscal del Estado, que representa la voluntad del Gobierno de Zapatero, algunos jueces, como de manera especial el juez Marlasca, parecen decididos a que se apliquen las leyes. Aún así no deja de sorprender que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya pospuesto hasta dentro de tres años la sentencia de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a Arnaldo Otegi. Al escribir estos comentarios se está pendiente de un nuevo juicio a este dirigente de Batasuna que podría llevarle a prisión sin más demoras. El Gobierno, sin embargo, sigue empeñado en su discurso de que todo va según lo previsto, de que todo va muy bien, y que ETA está en el buen camino de abandonar por completo su lucha armada. No parece extraño que cada vez más gente se pregunte si es que ETA tiene “cogido” al PSOE en algún “renuncio”, lo que explicaría la aparente falta de respuesta del Gobierno y la extremada seguridad y audacia de la banda.

En todo caso, las consecuencias de las actuaciones del Gobierno en relación con el estatuto catalán y con el alto el fuego de ETA comienzan a ponerse de manifiesto en la reforma del estatuto para Andalucía y en los anuncios de lo que será la reforma de otros estatutos a lo largo de los próximos meses. La actuación de los políticos reivindicando la denominación de nación no se corresponde con los deseos del pueblo, y las pretensiones de federalismo tampoco tienen el respaldo de la opinión pública. En la sección de Actualidad puede comprobarse, una vez más, que solo un 10% de los españoles quiere un Estado Federal, y solo un 2% opinan que las Comunidades Autónomas que lo deseen deberían poder declararse independientes de España. Por el contrario, el 50% de los españoles, confirmando los datos de muchas otras investigaciones de ASEP quieren que todo siga como está, e incluso está creciendo (hasta el 11% este mes) la proporción de quienes desearían que el Gobierno de España recupere algunas de las competencias que han sido transferidas a las Comunidades Autónomas.

Lo cierto es que la clase política, y sobre todo el Gobierno de España, parecen empeñados en ocuparse de problemas que no importan a los ciudadanos, mientras que los problemas que realmente les preocupan están desatendidos. Por ejemplo, la inmigración, que hasta hace unos años no representaba un problema para los españoles, está adquiriendo creciente notoriedad debido a la falta de controles en las fronteras, y a una política de regularización que, como se anunció en estas páginas a su debido tiempo, podía favorecer el efecto llamada al hacer depender la regularización de tener un contrato de trabajo. Como se anunció, esa política iba a favorecer la aparición de un nuevo negocio: la venta de contratos de trabajo a los inmigrantes, unos contratos laborales existentes solo sobre el papel, ya que posteriormente el inmigrante no recibía salario alguno, y además se hacía cargo del pago de las cuotas empresarial y del trabajador a la Seguridad Social. Lamentablemente, comienzan a percibirse críticas cada vez mayores de los ciudadanos hacia lo que consideran una política de inmigración equivocada que les perjudica en su vida diaria, lo que puede dar origen a unos sentimientos racistas y xenófobos que hasta ahora habían sido muy inferiores a los de otros países de nuestro entorno.

Vinculado a la inmigración está igualmente el problema de la delincuencia creciente, y sobre todo la violencia inusual de las bandas de crimen organizado. Por supuesto hace mal el PP en vincular esta violencia a la inmigración, pues no se puede trasladar a la ciudadanía la creencia de que los inmigrantes son mayoritariamente delincuentes. Pero hace mal el Gobierno en no reconocer que gran parte de la delincuencia, y de manera muy especial la delincuencia violenta de bandas organizadas está

protagonizada casi en exclusiva por extranjeros, en gran parte procedentes de países del este de Europa y de ciertos países de Latinoamérica. La falta de seguridad personal se está convirtiendo, en muy poco tiempo, en uno de los grandes problemas de los españoles, que incrementan sin cesar los gastos en seguridad que deberían proporcionar los cuerpos de Seguridad del Estado, a los que tienen derecho los contribuyentes. Y, mientras, de forma similar a lo que ocurrió con los atentados de Eta, algún dirigente de Cataluña se ha desmarcado declarando que ‘se conforma con que los delincuentes se vayan a otra parte’, con lo que, lejos de resolver el problema, se lo pasan a otras comunidades.

Y la economía es sin duda otro de los grandes temas que deberían preocupar al Gobierno más que los relativos a complacer las exigencias nacionalistas-localistas de la “clase política”. El pesimismo que caracteriza el sentimiento de los españoles hacia la economía en cualquiera de las cuatro dimensiones analizadas mensualmente por ASEP está adquiriendo unos niveles preocupantes. Por citar un ejemplo, las dos dimensiones referidas a la economía personal del entrevistado presentan el ISC (Índice de Sentimiento del Consumidor) más bajo de los últimos cuatro años y solamente pueden ser interpretadas como el desencanto de los españoles hacia una política económica que no genera tranquilidad, ni esperanza en una mejora de la situación para las familias. Con frecuencia se afirma que existen dos debates: El debate de los políticos, en el que el discurso de la oposición presenta panoramas catastrofistas que contrastan con los mensajes triunfalistas del gobierno que se vanagloria de sus logros económicos, y el debate doméstico o popular, el de las personas que, más allá de los discursos, miden su satisfacción con la economía en función de la seguridad laboral, en función de sus ingresos, en función del coste de la vida y, en resumen, en función del balance que establecen cada mes cuando comprueban el saldo de su cuenta corriente.

Durante el último mes, los españoles han presenciado un nuevo incremento en los tipos de interés y verifican día a día cómo las hipotecas y los préstamos en los que están inmersos la mayoría de ellos se disparan sin freno. Las familias también verifican día a día cómo el precio de la gasolina se ha disparado hasta unos límites que sobrepasan incluso los augurios que una vez hizo Joaquín Leguina, siendo acusado de “fantasma” por vaticinar en 1996 que el precio del litro de gasolina alcanzaría las 140 pesetas (0,8 euros), cuando apenas superaba los veinte duros. En la actualidad, la gasolina sin plomo ya ha alcanzado 1,2 euros, equivalente a las 200 pesetas. En otras palabras, la gasolina ha aumentado casi un cien por cien su valor en diez años, pero es evidente que los sueldos no han aumentado en la misma proporción durante esta misma década.

Este mes se ha conocido el acuerdo entre sindicatos y empresarios para reducir los costes del despido a cambio de otras medidas que incentiven los contratos indefinidos, pero tanto los sindicatos como los empresarios saben que dichos acuerdos generarán una reducción de las plantillas actuales, es decir mayores probabilidades de despido del personal con costes laborales más altos para su reemplazo por personal menos cualificado y más barato. Esta es la situación económica que perciben los españoles, más allá de los debates políticos, y la coincidencia es tal que, cuando se analiza el ISC en función de la ideología, se verifica una vez más que el pesimismo no es un sentimiento de los españoles afines a la derecha ideológica, sino compartido por los de izquierda y centro.

A continuación se muestra en un cuadro muy expresivo el sentimiento de los españoles de izquierda y derecha en cada una de las dimensiones estudiadas:

Comparación entre los ISC`s de los individuos de izquierda y derecha en mayo 2005 y variación con respecto a mayo de 2005

	Individuos de izquierda	Variación Anual	Individuos de derecha	Variación anual
ISC1	95	-7	93	+4
ISC2	98	-8	93	-4
ISC3	89	-12	59	-8
ISC4	94	-12	65	-9
ISC5	94		77	
IO	98	-11	96	=
IESE	90	-18	56	-10

El cuadro superior pone de manifiesto, en primer lugar, una diferencia lógica entre los dos grupos comparados, en el sentido de que los individuos de derecha son más pesimistas que los de izquierda. Sin embargo, la novedad reseñable está en que el sentimiento de pesimismo, no solo embarga a los de izquierda en todas las dimensiones estudiadas, sino que se acrecienta en proporciones muy superiores a la que describe la evolución de los individuos de derecha, de modo que, en un solo año, las diferencias entre los dos grupos se han reducido entre 3 y 11 puntos dependiendo del ISC analizado.

La valoración del sentimiento hacia la economía doméstica presente y futura es el menos negativo de todos en ambos casos, y también aquél en el que ambos grupos convergen en un tramo no superior a dos puntos de diferencia (en el caso del ISC-1) y de cinco puntos (en el caso del ISC-2).

Ello se refleja mejor en el índice de optimismo, donde se constata que ambos grupos presentan cifras que no divergen en más de dos puntos, pero con una diferencia muy expresiva entre ambos colectivos: Mientras que el IO de los de derecha no ha variado en comparación con el dato de mayo de 2005, el IO de los individuos de izquierda ha retrocedido 11 puntos para caer hasta el IO = 98.

Al analizar la situación de España, tanto los de izquierda como los de derecha se muestran mucho más pesimistas, lo que se traduce en un IESE = 90 entre los de izquierda y un IESE = 56 entre los de derecha. En este caso, sí se observa que la visión de los de derecha es mucho más catastrofista que entre el colectivo de izquierda, pero no es menos cierto que el pesimismo se ha agrandado entre los de izquierda (- 18 puntos) con una intensidad casi dos veces superior a la que caracteriza a los individuos de derecha (- 10 puntos).

En resumen, es evidente el divorcio cada vez mayor entre las actuaciones de la clase política y los anhelos y preocupaciones de los españoles. Por una parte, el Gobierno, que es el que debe establecer la agenda, ha abierto la caja de Pandora de las reivindicaciones territoriales, que ya llegan a querer controlar las cuencas hidrográficas, como si el agua no fuese de todos los españoles, ya que los ríos suelen discurrir por varias, y no solo por una, Comunidades Autónomas. Pero el PP tampoco parece acertar con su mensaje. Cuando se examinan los datos, parece evidente que la opinión pública se encuentra más próxima a las opiniones del PP que a las del Gobierno del PSOE en temas como el debate autonómico, la inmigración, la lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado y la delincuencia en general. Y sin embargo esa misma opinión pública otorga su confianza más al Gobierno del PSOE que al PP, una evidencia que debería llevar a este partido a preguntarse en qué se están equivocando. La valoración de los líderes del PSOE es muy superior a la de los líderes del PP. Y la intención de voto, tanto la expresada por los entrevistados como la estimación realizada mediante el modelo habitual de ASEP siguen dando cierta ventaja al PSOE, que aún reducida a solo casi tres puntos de diferencia según los datos de este mes, sigue siendo favorable al PSOE.

Después de dos años de legislatura PSOE y PP siguen enzarzados por la investigación del 11-M, y no es para menos. En los Flashes del año 2003 y 2004 se pueden encontrar críticas muy duras a la política prepotente del PP respecto a la oposición del PSOE, así como a la decisión de participar en el conflicto de Irak sin buscar el apoyo de la oposición y la comprensión de la opinión pública. No fueron menos duras las críticas a la actuación del Gobierno del PP en la crisis del 11-M nuevamente por no buscar la

colaboración de la oposición y por la forma como se llevó la política de información sobre aquellos sucesos. Por ello nos encontramos legitimados ahora para mostrar también una actitud crítica hacia la forma en que se han llevado las investigaciones sobre los sucesos del 11-M y a las múltiples acciones obstruccionistas que el ejecutivo parece haber estado aplicando a esas investigaciones. El 11-M no puede ser para los españoles el equivalente al caso Kennedy. Mientras, los puntos oscuros del sumario se acentúan con las últimas irregularidades denunciadas en la instrucción del caso por el juez Del Olmo, que incluso han supuesto la puesta en libertad de uno de los principales encausados.

El pueblo español está demandando por activa y por pasiva a sus representantes políticos, del PP o del PSOE, que se pongan de acuerdo en cuestiones que son absolutamente importantes para toda la sociedad, como lo son la política de inmigración, la política exterior y de seguridad y defensa, la política de lucha contra la delincuencia (en especial frente a la nueva delincuencia del crimen organizado), la organización territorial del Estado y algunas otras cuestiones. Los errores del PP en la anterior legislatura en su trato a la oposición no justifican los errores del PSOE en su trato a la oposición en la presente legislatura, pues el electorado acabará castigando a ambos.

EL CLIMA DE OPINIÓN

Con el fin de aclarar diversas consultas recibidas en ASEP sobre la fecha en que se realizan las entrevistas de cada sondeo y la de otros institutos de opinión, ASEP informa que, debido a las fiestas de la Semana Santa, el avance de resultados llegó este mes a sus clientes a los siete días de haber finalizado el trabajo de campo. A pesar del obligado paréntesis de los días festivos, el informe completo sobre La Opinión Pública de los Españoles, los Flashes, y en su caso el informe sobre Liderazgo Corporativo, llega a los clientes a los catorce días de haber finalizado el trabajo de campo. Otros institutos publican sus resultados con plazos más largos, por lo que es conveniente fijarse en la fecha de su trabajo de campo, y no solo en la referencia al mes, cuando se comparen esos otros resultados con los del informe ASEP.

Los supuestos efectos del anuncio del alto el fuego de ETA y la aprobación por el Congreso de los Diputados del nuevo estatuto para Cataluña sobre los indicadores del pasado mes de abril, si es que realmente se produjeron, parecen haber desaparecido ya. El Sistema de Indicadores ASEP para este mes de mayo vuelve a mostrar un clima de opinión relativamente negativo en lo económico y todavía bastante positivo en lo político. Los datos son

los que son, pero la interpretación de los datos es evidentemente subjetiva, y solo el futuro demostrará si dichas interpretaciones, y las previsiones elaboradas sobre ellas, estaban más o menos acertadas. En ese sentido, puede afirmarse que los españoles no están satisfechos de la situación económica, y su relativa satisfacción con la situación política parece basarse más en el rechazo al PP que en el apoyo al PSOE, y el rechazo al PP parece atribuible no tanto al contenido de lo que se dice como a la forma en qué se dice y a quienes lo dicen. Pero esta interpretación, si bien basada en el análisis de los datos de este y anteriores sondeos, no es un dogma, y por tanto no tiene por qué ser aceptada por el lector.

Así, vuelven a empeorar los dos indicadores económicos principales, el Sentimiento del Consumidor, que pierde 4 puntos, y la Evaluación de la Situación Económica nacional, que pierde 7 puntos. En consecuencia, los dos indicadores continúan aún más por debajo del nivel de equilibrio, indicando un sentimiento mayoritario de insatisfacción y pesimismo con la situación y perspectivas de la economía española. La propensión al ahorro y la proporción de ahorradores (los que dicen ahorrar aunque solo sea un poco) permanecen más o menos en sus valores habituales, es decir, una proporción de ahorradores cercana a un tercio de la población.

El Optimismo Personal también ha disminuido en cuatro puntos este mes, y se sitúa por tanto cuatro puntos por debajo del nivel de equilibrio. Parece conveniente recordar que este índice solo ha estado dos veces por encima del nivel de equilibrio durante los doce últimos meses, y en esas dos ocasiones solo ha estado tres puntos por encima de dicho nivel. Debe resaltarse asimismo una vez más que la orientación hacia nuevos valores post-materialistas, de auto-expresión no han vuelto a alcanzar el 40% de años atrás durante los últimos doce meses, manteniéndose por el contrario en alrededor de un tercio de los entrevistados, lo que sugiere que la preocupación de los españoles por su seguridad personal (frente al terrorismo y la delincuencia) y económica (preocupación por el paro, las pensiones, la vivienda, etc.) sigue siendo mayoritaria, y creciente, en la población española. Concretamente, solo algo más de un tercio de los españoles muestra esta nueva orientación post-materialista, mientras que dos tercios siguen aferrados a los más tradicionales valores materialistas. Hay que señalar también que la práctica religiosa (medida por un índice de 1 a 4 puntos) se sitúa por primera vez desde 1986 por debajo de los 2 puntos, 1,9 para ser más exactos, lo que sugiere el avance de la secularización creciente de la sociedad española.

Pasando a los indicadores políticos, la Satisfacción con el Funcionamiento de la Democracia se mantiene alta e incluso aumenta dos puntos este mes,

mientras que la Satisfacción con el Gobierno aumenta en un punto también, obteniendo así la sexta calificación más alta de los últimos doce meses. En realidad, la valoración del Gobierno Español de estos dos últimos meses, abril y mayo, supera las obtenidas desde diciembre, y se sitúa más o menos en las valoraciones de antes del verano del 2005. Y la Exposición a la Información se sitúa nuevamente en el nivel de equilibrio, mejorando también levemente respecto a los dos meses precedentes.

Así pues, en general puede afirmarse que las evaluaciones sobre la economía son claramente negativas, y los indicadores políticos siguen siendo bastante positivos, mostrando una cierta recuperación en la Satisfacción con el Gobierno. Pero esta satisfacción con la situación política no parece tan clara cuando se toma en consideración el hecho de que la estimación de voto de este mes reduce la diferencia entre PSOE y PP a solo dos puntos y ocho décimas, reduciendo en 1,3 puntos porcentuales la diferencia que había el mes pasado. En definitiva, después de dos años de gobierno socialista, el equilibrio de fuerzas es similar, incluso un punto porcentual menos de diferencia que en las pasadas elecciones de marzo del 2004, lo que parece atribuible al desgaste que el debate del estatuto para Cataluña y las negociaciones con ETA-Batasuna para acabar con el terrorismo parecen estar produciendo en el Gobierno del PSOE. Aún así, y como se ha indicado en diversas ocasiones, el PP no ha sabido, o no ha podido, aprovechar bien el desgaste del Gobierno a causa de esas actuaciones políticas.

La Corona recibe nuevamente este mes la valoración más alta (6,4 puntos en una escala de 0 a 10) junto con la Unión Europea, y ambas son seguidas por las Naciones Unidas (5,8 puntos), las Fuerzas Armadas (5,7), el Gobierno de la Nación (5,3), la OTAN (5,2) y los Bancos (4,9 puntos en una escala de 0 a 10 puntos). De las cuatro instituciones fijas, solo las Fuerzas Armadas repiten la valoración obtenida el mes anterior, mientras que las otras tres obtienen una valoración algo mejor, una décima el Gobierno de la Nación y los Bancos, y dos décimas la Corona.

En cuanto a los personajes públicos por los que se ha preguntado, Felipe González y José Bono reciben este mes la valoración más alta (5,6 puntos en una escala de 0 a 10), seguidos por José Luis Rodríguez Zapatero (5,3) y M^a Teresa Fernández de Vega (5,0). Todos los demás personajes públicos por los que se ha preguntado este mes reciben valoraciones inferiores a los 5 puntos, José Antonio Alonso y Pedro Solbes (4,7 puntos cada uno), Alfredo Pérez Rubalcaba y Rosa Díez (4,6 en ambos casos), Juan Fernando López Aguilar y Alfonso Guerra (ambos con 4,5 puntos), Carmen Calvo (4,4), Miguel Angel Moratinos (4,2), Gaspar Llamazares (4,1), y Mariano

Rajoy y José M^a Aznar (3,4 puntos cada uno en una escala de 0 a 10 puntos). Es preciso indicar que Bono es el líder que incrementa más su valoración desde la última vez en que se preguntó por él, de manera más precisa, nada menos que en un punto entero, lo que sugiere que es consecuencia de su dimisión. También debe subrayarse que todos los demás líderes mejoran algo su última valoración, excepto Aznar y Rajoy que la empeoran ligeramente.

LA ACTUALIDAD

Las preguntas sobre la actualidad este mes se refieren a los problemas de España, la valoración de los habitantes de las diferentes Comunidades Autónomas, la reforma de algunos estatutos autonómicos, el alto el fuego de ETA, la labor del Gobierno de la Nación, las centrales nucleares y las opiniones sobre diversas cuestiones de política internacional.

Los Problemas de España

Una vez más se ha preguntado por los problemas más importantes a los que nos enfrentamos en España actualmente. Cada entrevistado podía mencionar un máximo de tres problemas, y como es habitual, el primero sigue siendo el desempleo, citado por un 45% de los entrevistados, seguido de la vivienda (35%), de la inmigración (28%), de las pensiones (21%) y del terrorismo (19%). El cambio más importante es el relativo al terrorismo, que de ocupar habitualmente el segundo lugar ha pasado este mes a la quinta posición. De manera similar, la inmigración, que no estaba entre los cuatro primeros problemas citados, aparece ahora en segunda posición.

Valoración de los Habitantes de las diferentes Comunidades Autónomas

Esta es la octava vez desde 1994 que se pregunta por la valoración que los españoles hacen de los habitantes de las diferentes Comunidades Autónomas. La valoración, en una escala de 0 a 10 puntos, suele ser alta en todos los casos, generalmente por encima de los 7 puntos, y así ha ocurrido también en la investigación de este mes. Los más valorados por el conjunto de la muestra han sido siempre, y también esta vez, los andaluces, que obtienen una valoración de 7,7 puntos, mientras que los menos valorados, que además son los que reciben puntuaciones inferiores a los 7 puntos, son los valencianos (6,9), los vascos (6,4) y los catalanes (6,2 puntos). Catalanes y vascos han sido en las ocho investigaciones disponibles los

menos valorados, aunque en solo dos ocasiones (noviembre del 2000 y febrero del 2004) fueron los vascos, y no los catalanes, los peor valorados.

Reforma de Estatutos Autonómicos

El 72% de los entrevistados prefieren que su Comunidad Autónoma se llame precisamente así, Comunidad Autónoma, y proporciones inferiores al 10% en cada caso preferirían las denominaciones de nación, región, nacionalidad, comunidad nacional, principado, reino, realidad nacional, país, comunidad foral, etc. En el momento actual, un 25% de los españoles votaría a favor del estatuto catalán y un 22% votaría a favor del estatuto valenciano, pero un 41% votaría en contra del catalán y un 31% votaría en contra del valenciano. Por otra parte, un 31% de los entrevistados cree que el nuevo estatuto catalán implica una reforma encubierta de la Constitución Española, pero un 28% creen que es totalmente constitucional (el 41% restante carece de opinión). Las entrevistas de esta investigación se realizaron antes de la expulsión de ERC del gobierno tripartito de Cataluña pero cuando ya había anunciado su intención de votar “no” en el referéndum sobre el estatuto. Pues bien un 39% de los entrevistados pensaba que esa decisión provocaría la disolución del gobierno tripartito (frente a un 14% que no lo creía así), y un 37% pensaba igualmente que esa disolución implicaría la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña (frente a un 16% que no creía en esa consecuencia). Más de dos tercios de los españoles (69%) opinan que “solo existe una nación en España, la nación española”, mientras que un 18% creen que tanto España como algunas Comunidades Autónomas merecen el nombre de naciones y solo un 2% opinan que algunas Comunidades Autónomas son naciones pero España no es una nación. En cuanto a la organización del Estado, y confirmando los resultados obtenidos desde 1996, la mitad de los españoles (50%) opina que todo debe seguir como hasta ahora, frente a un 12% partidario de una Administración Única, un 10% que desearía un Estado federal y un 2% que opina que las CCAA que lo deseen deberían tener derecho a declararse Estados independientes separados de España. Pero ha aumentado hasta un 11% la proporción de quienes preferirían que el Gobierno Español recupere competencias ya transferidas a las CCAA.

El Alto el Fuego de la ETA

Algo más de uno de cada tres entrevistados (36%) creen que el alto el fuego de ETA será definitivo, pero un 25% opina que solo servirá para que ETA se reorganice y vuelva a matar cuando le convenga, mientras que un 19% opina que solo durará hasta que se ponga en libertad a los presos y se legalice a Batasuna para que pueda presentarse a elecciones. Por

comparación con los datos de abril, ha disminuido al 44% la proporción de quienes creen que “hay que aprovechar la debilidad de ETA para lograr poner fin a su violencia terrorista aunque para ello haya que hacer algunas concesiones”, mientras que ha aumentado al 38% la proporción que opina que “con ETA no se puede negociar en absoluto y menos aún hacer ningún tipo de concesiones”. Utilizando una escala de 0 a 10 puntos para evaluar las posibles contrapartidas que se podrían dar a ETA para que respete el alto el fuego y abandone la violencia, en la que el 0 significa que no se debería conceder esa contrapartida “nunca”, y el 10 significa que se debería conceder esa contrapartida “cuanto antes”, hay una mayoría absoluta de españoles que no quiere dar ninguna contrapartida nunca o casi nunca. Los resultados son casi idénticos a los de abril, incluso más reacios a conceder ninguna contrapartida, de manera que el promedio en la escala de 0 a 10 puntos no sobrepasa en ningún caso el promedio de 3,2 puntos, y solo el acercamiento de los presos supera los 3 puntos, precisamente el promedio citado. Todos los demás promedios están por debajo de los 3 puntos, e incluso seis de las ocho medidas no superan los 2 puntos. No obstante, un 42% de los entrevistados creen que ETA está realmente respetando el alto el fuego, y un 52% se muestra de acuerdo en que “para acabar con la violencia de ETA no debe haber vencedores ni vencidos”. Pero la opinión pública se encuentra muy dividida respecto a su evaluación de la política del Gobierno de Rodríguez Zapatero para acabar con la violencia de ETA, pues un 33% dice estar de acuerdo con ella, pero un 37% está en desacuerdo con esa política.

La Labor del Gobierno de la Nación

Un 45% de los españoles cree que Bono dimitió por estar en desacuerdo con Rodríguez Zapatero, frente a un 19% que opina que fue Zapatero quien decidió su cese porque estaba harto de él. Por otra parte, un 45% de los entrevistados afirma que prefiere un gobierno del PSOE con Zapatero como Presidente, frente a un 17% que preferiría un gobierno del PP presidido por Rajoy, un 10% que preferiría un gobierno del PSOE presidido por alguien distinto a Zapatero, y un 5% que preferiría un gobierno del PP presidido por alguien distinto a Rajoy. Además, mientras un 12% de los entrevistados cree que Zapatero podría convocar elecciones anticipadas, un 19% desearía que lo hiciese.

Las Centrales Nucleares

La discusión sobre las centrales nucleares en España está iniciándose poco a poco otra vez, pero de manera muy diferente a como lo hizo en la década de los años '70. En efecto, mientras que la opinión pública sigue firme en

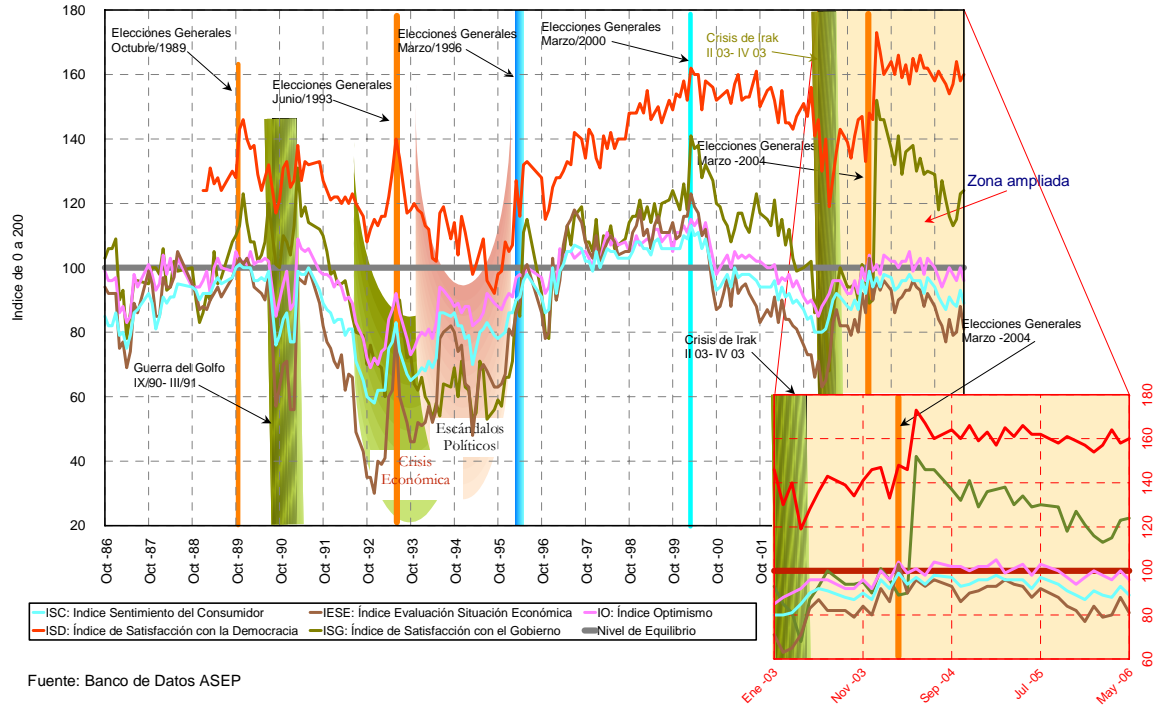
contra de la energía nuclear, como consecuencia de las campañas de propaganda en contra de ella desde la izquierda en aquellos años '70 y '80, lo curioso es que en la actualidad es la clase dirigente del PSOE la que quiere cambiar su orientación hacia esta fuente de energía, pero no parecen atreverse a decir lo contrario de lo que predicaron durante décadas. Por eso, no debe extrañar que cuando Montilla, Almunia, y otros dirigentes del PSOE, hablan a favor de la energía nuclear (eso sí, con seguridad....), coincidiendo así con las posiciones defendidas mayoritariamente desde la derecha y sectores empresariales, un 56% de los entrevistados afirmen que “se deben cerrar todas las centrales nucleares en España”, y solo un 8% diga que “se deben construir más centrales nucleares en España”. Un 17% de los entrevistados se mantiene en una posición intermedia, pues defiende que se abran las centrales que se han cerrado, pero no que construyan otras nuevas, y el 19% restante no contesta a la pregunta.

Política Internacional

Un 57% de los españoles opina que no se deberían enviar más tropas españolas a Afganistán, y un 20% adicional opinan que no solo no se deberían enviar más tropas sino que se deberían traer las tropas españolas que hay en Afganistán. En cuanto a Irak, un 68% de los entrevistados opina que la situación en Irak es ahora peor o mucho peor que antes de la actuación de Estados Unidos y sus aliados. Respecto a la crisis nuclear con Irán, un 34% de los entrevistados opina que Irán quiere seguir con su programa nuclear porque quiere defenderse de un posible ataque de otro país (y de ellos, el 73% cree que ese país del que Irán quiere defenderse es Estados Unidos), un 22% creen que quiere seguir por razones económicas (para producir energía eléctrica), y solo un 10% cree que es para poder atacar a otro país (los más citados son Estados Unidos e Israel, mencionados por más de un tercio de estos entrevistados). Un 35% de los entrevistados opina que los Estados Unidos acabarán por intervenir militarmente en Irán sin armamento nuclear, un 25% opina que impondrá sanciones económicas pero sin intervenir militarmente, y un 12% cree incluso que bombardearán Irán con armamento nuclear. Sin embargo, si se pasa de las expectativas a los deseos, un 40% desearían que Estados Unidos trate de convencer a Irán para que abandone su programa nuclear pero sin amenazas militares ni económicas, sino ofreciendo compensaciones, y un 31% desearían que se impongan sanciones económicas pero sin intervenir militarmente. Pero las expectativas y deseos respecto a lo que debería hacer la Unión Europea son más conciliadoras, puesto que algo más de una cuarta parte de los entrevistados cree que la UE impondrá sanciones económicas pero sin intervenir militarmente, y otra proporción similar cree que ofrecerán compensaciones. Y casi la mitad (49%) desearían que la UE les

ofrezca compensaciones, mientras que solo un 18% desearían que la UE impusiera sanciones económicas. Finalmente, un 28% de los entrevistados opinan que Estados Unidos es el país que representa el mayor peligro para la paz en el mundo actualmente, un 13% creen que es Irak, y un 12% mencionan a Irán. Y, de manera similar, un 14% de los entrevistados cree que Marruecos es el país que representa un mayor peligro para España, seguido de Irak (12%) y de los Estados Unidos (11%).

EVOLUCION DE LOS INDICADORES MAS SIGNIFICATIVOS



Fuente: Banco de Datos ASEP